



Procedimiento	Aprehensión y entrega
Demandante	Juancho Te Presta S.A.S.
Demandado	Jesica Johana Quintero Castaño
Radicado	No. 05001-22-03-000-2021-00643-00
Procedencia	Juzgado 28 Civil Municipal de Medellín
Ponente	Luís Enrique Gil Marín
Interlocutorio	No. 017
Asunto	Conflicto de competencia
Tema	Tratándose de procesos donde se ejercitan derechos reales, es competente el Juez del lugar donde estén ubicados los bienes.

TRIBUNAL SUPERIOR

SALA UNITARIA DE DECISIÓN CIVIL

Medellín (Ant.), dieciocho de febrero de dos mil veintidós

I. OBJETO

Se decide el conflicto negativo de competencia suscitado entre el **JUZGADO VEINTIOCHO CIVIL MUNICIPAL DE MEDELLÍN** y el **JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL DE ITAGUI (ANT.)**, en la solicitud de aprehensión de garantía mobiliaria solicitada por **JUANCHO TE PRESTA S.A.S.**

II. ANTECEDENTES

Hechos, actuaciones y proposición del conflicto:

JUANCHO TE PRESTA S.A.S. solicita la aprehensión y entrega de *"todos los dineros"* que están depositados en la cuenta de ahorros número 01500044621 de Bancolombia S.A., a nombre de JESICA JOHANA QUINTERO CASTAÑO, identificada con cédula de ciudadanía No. 1036648876, de conformidad con el artículo 2.2.2.4.2.3 del Decreto 1835 de 2015, para la ejecución por pago directo de la garantía mobiliaria.

Para ejecutar la orden de aprehensión y entrega, solicitó oficiar a BANCOLOMBIA S.A., *"quien recibe notificaciones judiciales en el correo electrónico notificacijudicial@bancolombia.com.co o en al dirección física Carrera 48 No. 26-85 de Medellín, proceda a poner a disposición de JUANCHO TE PRESTA SAS ya sea a través del servicio o producto CONTROL DE CUENTA o depositando dichas cantidades de dinero en la cuenta de ahorros número 226-0331114-7 del Banco BANCOLOMBIA S.A a nombre de JUANCHO TE PRESTA S.A.S."*.

Para que la deudora reciba notificaciones, la demanda indica como dirección la Carrera 50 A No. 22-51 de Itagüí (Antioquia) y jessi0864@hotmail.com y en el acápite de competencia, expresamente señala: *"... es de su competencia la presente solicitud por la cuantía la cual no excede los 40 SMMLV equivalente en \$36.341.040 estimada en \$1.294.062 y el domicilio de **EL GARANTE Y/O LOS DEUDORES**"*.

La solicitud se dirigió a los juzgados civiles municipales de Itagüí (Ant.), habiendo correspondido al JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL DE ITAGUÍ (ANT.), quien en proveído del 10 de noviembre de 2021, rechazó la solicitud de aprehensión y entrega por falta de competencia, porque *"Revisada la solicitud allegada, se advierte que la apoderada de la parte actora relaciona como ubicación del bien que pretende aprehender el Municipio de Medellín Antioquia (...) para efectos de definir la competencia se acoge al municipio donde se debe practicar la aprehensión, tal y como lo manifiesta el apoderado solicitante, el juez de Medellín (Antioquia), motivo suficiente para colegir que este Juzgado no es el competente para conocer del asunto en cuestión"*.

El JUZGADO VEINTIOCHO CIVIL MUNICIPAL DE MEDELLIN, a quien se asignó el proceso por auto del 30 de noviembre de 2021, declaró la falta de competencia para conocer de la solicitud de aprehensión de garantía mobiliaria, argumentando que el Juzgado Tercero Civil Municipal de Itagüí se basó en la dirección física citada por la parte demandante para afirmar que el municipio donde debe practicarse la aprehensión es Medellín; sin que en ningún momento manifestara que el bien dado en garantía se encuentra ubicado en Medellín; pues únicamente citó la dirección del domicilio principal de Bancolombia para efectos de remitir allí el oficio que se expida; pero el oficio se tiene que radicar en el correo electrónico en aplicación al artículo 11 del Decreto 806 de 2020; los dineros depositados en la cuenta bancaria *"NO se encuentran físicamente en la Carrera 48 No 26-85 de Medellín. Todo lo contrario, se trata de un dinero inmaterial, intangible,*

electrónico, hasta que, por ejemplo, se pida un retiro (...) Además, las Cuentas Bancarias son de ORDEN NACIONAL. Así, no puede afirmarse que una persona "tiene" un dinero depositado en determinada sucursal o agencia de la entidad financiera (...) si los anteriores argumentos no resultan suficientes – ante lo imposible que resulta ubicar en un lugar físico concreto los dineros depositados en una cuenta bancaria – puede consultarse la intención o voluntad de las partes. Al respecto las partes pactaron que los bienes dados en garantía permanecerían en ITAGÜÍ, lugar donde BANCOLOMBIA cuenta con cajeros, corresponsales, sucursales, etc."

III. CONSIDERACIONES

El conflicto negativo de competencia: Un conflicto negativo de competencia se origina, cuando dos Despachos Judiciales respectivamente reniegan de la misma, uno de los cuales virtualmente está llamado a conocer del asunto, por la aplicación de los diferentes fueros que existen para su determinación (Art. 139 del C. General del Proceso).

El caso concreto: Se advierte que el caso bajo estudio no es propiamente un proceso sino una diligencia, toda vez que la Ley 1676 de 2013, que promueve el acceso al crédito y contiene disposiciones sobre garantías mobiliarias, introdujo la modalidad de "*pago directo*", dando la posibilidad al acreedor para satisfacer la prestación debida con el bien mueble dado en garantía a su favor. En su artículo 6º, establece a más de los casos contemplados en la ley, el garante puede constituir garantías mobiliarias a favor del acreedor sobre: "*1. Derechos*

sobre bienes existentes y futuros sobre los que el garante adquiriera derechos con posterioridad a la constitución de la garantía mobiliaria (...) 2. Derechos patrimoniales derivados de la propiedad intelectual (...) 3. Derecho al pago de depósitos de dinero (...) 4. Acciones, cuotas y partes de interés representativas del capital de sociedades civiles y comerciales, siempre que no estén representadas por anotaciones en cuenta (...) 5. Derechos a reclamar el cumplimiento de un contrato que no sea personalísimo por el obligado o por un tercero designado por las partes como cumplidor sustituto (...) **6. En general todo otro bien mueble, incluidos los fungibles, corporales e incorporeales, derechos, contratos o acciones a los que las partes atribuyan valor económico**" (Subrayas intencionales).

Sobre el particular, el párrafo segundo del artículo 60 de la citada ley dispone que "*Si no se realizare la entrega voluntaria de los bienes en poder del garante objeto de la garantía, el acreedor garantizado podrá solicitar a la autoridad jurisdiccional competente que libre orden de aprehensión y entrega del bien, con la simple petición del acreedor garantizado*"; por su parte, el art. 57 ibídem indica que la autoridad jurisdiccional competente es el juez civil y la Superintendencia de sociedades, sin precisar la competencia por el factor territorial.

La Corte Suprema de Justicia¹ ha tenido la oportunidad de pronunciarse para determinar la competencia por el factor

¹ Auto AC747-2018.

territorial del juez para librar la orden de aprehensión y entrega del bien, en los siguientes términos:

"Hasta este punto queda despejado que el procedimiento de «aprehensión y entrega del bien» está asignado al funcionario civil del orden municipal, pero quedando un margen de duda si para el efecto prima la regla de ejercicio de derechos reales o la indicada en caso de que «diligencias especiales», sin que encaje el supuesto en forma exacta en alguna de ellas, por lo que, para colmar tal vacío es preciso acudir a situaciones análogas, en virtud del artículo 12 del Código General del Proceso.

"En ese laborío fluye que el contexto más próximo y parecido al que regulan los artículos 57 y 60 de la ley 1676 de 2013 es el previsto en el numeral 7º del artículo 28 del Código General del Proceso, en tanto allí se instituye, se itera, el criterio según el cual la asignación se determina por la ubicación de los bienes, cuando la acción abrigue «derechos reales».

"En consecuencia, las diligencias de este linaje se atribuyen a los Juzgados Civiles Municipales o Promiscuos Municipales, según sea el caso, de donde estén los muebles garantizadores del cumplimiento de la obligación, lo que no siempre coincide con el lugar donde aquellos se encuentren inscritos, toda vez que esa formalidad se define en el artículo 2º de la ley 769 de 2002 como un «[p]rocedimiento destinado a[l] registro inicial de un vehículo automotor ante un organismo de tránsito» en el que «se consignan las características, tanto internas como externas del vehículo, así como los datos e identificación del

propietario»; sin que necesariamente conlleve sujeción material o jurídica del vehículo a ese lugar, tanto más si éste por su naturaleza puede circular libremente en todo el territorio nacional.

(...)

"3.- Sobre el particular, en CSJ AC529-2018 se señaló como

(...) no obstante que la última regla del mismo artículo [28 del Código General del Proceso] asigna la competencia "[p]ara la práctica de pruebas extraprocesales, de requerimientos y diligencias varias..." al "juez del lugar donde deba practicarse la prueba o del domicilio de la persona con quien debe cumplirse el acto, según el caso", deja un vacío cuando se trata de la "retención", toda vez que, se reitera, lo aquí perseguido es la mera aprehensión de un mueble donde y con quiera que se encuentre. (...) Así las cosas, es preciso superar esa laguna efectuando la integración normativa que prevé el artículo 12 ídem para salvar los "[v]acíos y deficiencias del código", cometido para el que primariamente remite a "las normas que regulen casos análogos", encontrándose que precisamente el numeral 7 del artículo 28 disciplina la situación más afín, pues, caso omiso de que aquí no se está ante un proceso, es claro que sí se ejercitan derechos reales".

En este sentido, el artículo 28 del C. General del Proceso, que consagra las directrices que se deben tener en cuenta para determinar la competencia, consagra una competencia privativa teniendo en cuenta el fuero real; al efecto dispone en el numeral 7: *"En los procesos en que se ejerciten **derechos***

*reales, en los divisorios, de deslinde y amojonamiento, expropiación, servidumbres, posesorios de cualquier naturaleza, restitución de tenencia, declaración de pertenencia y de bienes vacantes y mostrencos, **será competente, de modo privativo, el Juez del lugar donde estén ubicados los bienes,** y se hallen en distintas circunscripciones territoriales, el de cualquiera de ellas a elección del demandante (Negritas intencionales).*

En este caso se advierte que el párrafo segundo del acápite de **"3. DESCRIPCIÓN DE LA GARANTÍA MOBILIARIA"** del **"CONTRATO DE GARANTÍA MOBILIARIA"**, indica que: "Las partes de común acuerdo, para garantizar obligaciones presentes y futuras propias o ajenas, también han incluido como bienes en garantía, los depósitos de dinero en cuentas bancarias que tenga **EL GARANTE Y/O DEUDORES,** constituidos o depositados a su favor en los siguientes establecimientos bancarios. (...) Banco BANCOLOMBIA S.A. 01500044621..." y en el acápite **"8. LUGAR DE PERMANENCIA (en caso de que aplique)"** (...) Los bienes de los que consta la garantía mobiliaria permanecerán ubicados en la siguiente dirección: Itagüí – Antioquia – Cr 50ª #22-51 (...) **EL GARANTE** se obliga a poner los bienes descritos a disposición e JAUNCHO_TE_PRESTA en el lugar señalado en esta cláusula cuando este lo requiera para cualquier efecto relacionado con la Garantía Mobiliaria..."; de donde se sigue que por acuerdo de las partes, la dirección donde permanecerán los bienes objeto de la garantía corresponde al municipio de Itagüí (Ant.) y, por lo tanto, este es el criterio para determinar la competencia por el factor territorial, como viene de precisarse.

Nótese que la demanda, a más de que fue radicada ante los juzgados civiles municipales de Itaguí (Ant.), contrario a lo afirmado por el Juzgado Tercero Civil Municipal de Itagüí (Ant.), en ningún momento indicó que el bien dado en garantía está ubicado en la ciudad de Medellín y, si bien el inciso segundo del acápite de pretensiones, solicitó oficiar a Bancolombia S.A. *"para efectos de notificaciones judiciales"* a la dirección electrónica notificacijudicial@bancolombia.com.co o a la carrera 48 No. 26-85 de Medellín, fue para efectos comunicar la orden de aprehensión; a lo que se agrega que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 806 de 2020, el oficio se tiene que remitir a la dirección electrónica.

Con independencia de situaciones como la presente, donde quizás la aprehensión pretendida se pueda hacer efectiva desde cualquier lugar o municipio del país, existen mecanismos para determinar cual de los jueces que existe en cada uno de esos municipios es el competente para conocer de una medida como la solicitada, como ocurre en este caso, donde las partes indicaron una dirección donde permanecerán los bienes dados en garantía; en otros casos, en ausencia de ese acuerdo contractual, se tendrá que acudir a otros mecanismos para determinar el juez competente, para que esa competencia no quede indeterminada y sujeta a la voluntad de una de las partes contratantes.

Así las cosas, no había razón para que el Juzgado Tercero Civil Municipal de Itaguí (Ant.), renegara de la competencia para conocer del trámite, razón por la cual se le asignará la

competencia para conocer de la presente solicitud de aprehensión de garantía mobiliaria, a quien se remitirá el expediente, de lo cual se informará al JUZGADO VEINTIOCHO CIVIL MUNICIPAL DE MEDELLIN y a la parte interesada.

A mérito de lo expuesto, la **SALA UNITARIA DE DECISION CIVIL**,

R E S U E L V E

- 1. DEFINIR** la competencia para seguir conociendo de la solicitud de aprehensión y entrega en el **JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL DE ITAGUÍ (ANT.)**, por lo indicado en la parte motiva.
- 2.** Remítase el expediente al referido juzgado, para que imprima el trámite que legalmente corresponde.
- 3.** Ofíciase al JUZGADO VEINTIOCHO CIVIL MUNICIPAL DE MEDELLIN, y a la parte interesada, informando la decisión adoptada, a quienes se remitirá copia de este proveído.

NOTIFÍQUESE



LUIS ENRIQUE GIL MARÍN
Magistrado